

Jurdana Uriarte Lejarraga Bermeoko Udaleko IDAZKARI NAGUSIAREN**21/2020 TXOSTENA**

Gaia: Alarma egoerak kontratazioan duen eragina

Txostenaren oinarria: Toki Erakundeen Izaera Nazionaleko Gaikuntzadun Funtzionarioen Araubide Juridikoa onartzen duen martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren 3.3.h artikulua eta azaroaren 8ko 9/2017 Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 3.8 Xedapen Gehigarria

1. Aurrekariak

Lehenengoa.- COVID-19aren hedapenak eragindako osasun-alertak sortu duen egoeraren aurrean, Lehendakariak, martxoaren 13ko 6/2020 Dekretua eman zuen, Lehendakariak Euskadiko Herri Babeseko Plana-Larrialdiei Aurregiteko Bidea zuzentzeko eskumenak berengatzeko.

Bigarrena.- COVID-19ak sortutako osasun krisia kudeatzeko Alarma Egoera ezartzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua onartu zen.

Hirugarrena.- Bermeoko Udalak alarma egoera dela eta hainbat neurri hartu ditu eta 2020ko martxoaren 24an emergentzia aldarrikapena egin du kontratazio, gastu eta giza baliabideen kudeaketarako.

2. Oinarri juridikoak

2.1. Aplikagarria den araudia

- Martxoaren 14ko 463/2020 Errege dekretua alarma egoera adierazten dena COVID-19 osasun krisiaren egoera kudeatzeko
- Martxoaren 17ko 8/2020 Legegintzako Errege Dekretua COVID-19ak sortutako eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko premiazko eta ezohiko neurriak jasotzen dituen
- Martxoaren 24ko 816/2020 Alkatetza dekretua emergentzia egoera aldarrikatzeko kontratazioan, gastuaren kudeaketan eta giza baliabideen kudeaketan



- Azaroaren 8ko 9/2017 Sektorre Publikoko Kontratuen Legea

- Urriaren 1eko 40/2015 Sektorre Publikoko Araubide Juridikoari buruzko Legea

2.2. Azterketa juridikoa

A. Segidan ematen diren zerbitzu eta hornidura kontratuei buruz

8/2020 Legegintzako Errege Dekretuaren 34. artikulua arabera:

1. Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, quedarán automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.

Cuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución de un contrato público quedará en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista. Los daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser indemnizado serán únicamente los siguientes:

1.º Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato, durante el periodo de suspensión.



Gastu horiekin lotuta, argi utzi behar da azpikontratututako operadore ekonomikoak dauzkan langileriako gastuak ez direla kalte-ordainen artean sartzen. Horrela, adierazi du Estatuko Abokatutza Orokorrak 2020ko martxoaren 23an egindako txostenean.

2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión del contrato.

3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato.

4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.

La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista y en el plazo de cinco días naturales hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo. Con esta finalidad el contratista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación reflejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible; el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato. Las circunstancias que se pongan de manifiesto en la solicitud podrán ser objeto de posterior comprobación. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista, esta deberá entenderse desestimatoria.

No resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere el presente artículo lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; ni tampoco lo dispuesto en el artículo 220 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Hau da, kasu honetan ez dira aplikagarri egoera arruntetan Sektore Publikoko Kontratuen Legean eteteei buruz ezarritako kalte-ordainak.



...

La suspensión de los contratos del sector público con arreglo a este artículo no constituirá en ningún caso una causa de resolución de los mismos.

B. Kontratua luzatzeko edo hasierako epea luzatzeko aukerei buruz

Legegintzako Errege Dekretuaren 34.2. artikulua aukera hori aurreikusten du esaten duenean:

En los contratos públicos de servicios y de suministro distintos de los referidos en el apartado anterior, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19, cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, y el mismo ofrezca el cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El órgano de contratación le concederá al contratista la ampliación del plazo, previo informe del Director de obra del contrato, donde se determine que el retraso no es por causa imputable al contratista, sino que se ha producido como consecuencia del COVID-19 en los términos indicados en el párrafo anterior. En estos casos no procederá la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato.

Adicionalmente, en los casos a que se refiere este apartado en su primer párrafo, los contratistas tendrán derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19, hasta un límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato. Solo se procederá a dicho abono previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad y cuantía por el contratista de dichos gastos.



Ematen du kontraesan egon daitekeela 34.1. lehen paragrafoaren eta zazpigarren paragrafoen artean, horren inguruan estatuko abokatutza orokorraren kontsultoria zerbitzuak martxoaren 19an adierazi du:

Existe cierta contradicción entre el carácter automático de la suspensión al que alude el párrafo primero del artículo 34.1, y la necesidad de que la aplicación de dicho apartado y, consecuentemente, de la suspensión contractual automática que en el mismo se contempla, haya de tener lugar a instancia del contratista, y previa justificación de las circunstancias que el párrafo séptimo del artículo 34.1 se establecen, que serán apreciadas por el órgano de contratación.

*Entendemos que la finalidad de esta disposición es la de proteger al contratista que tenga dificultades para poder ejecutar los contratos públicos que le hayan sido adjudicados, debido a la emergencia sanitaria que ha motivado la declaración del estado de alarma. En la medida en que existan **contratistas** que, pese a dicha situación excepcional, **consideren que pueden continuar ejecutando adecuadamente el contrato, podrá no operar su suspensión. De ahí que ésta tenga que ser instada por el propio contratista, previa justificación de las circunstancias que permitan acordarla, y que deberán ser apreciadas por el órgano de contratación.***

*En consecuencia, y pese a la literalidad del párrafo primero, la suspensión **será acordada por el órgano de contratación cuando aprecie la imposibilidad de ejecutar el contrato, siempre a instancias del contratista, que deberá justificar las circunstancias que enumera el párrafo 7 del artículo 34.1. Una vez acordada la suspensión, sus efectos serán automáticos y se retrotraerán al momento en el que se produjo la situación de hecho que la originó.***

Adierazi behar da 8/2020 Legegintzako Errege Dekretuaren 34. 6 artikulua araberan, goian aipatutakoak ez dira aplikagarriak izango hurrengo kontratuetan:

- a) Contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.*
- b) Contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas informáticos.*



c) Contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.

d) Contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.

C. Obra kontratuei buruz

Legegintzako Errege Dekretuaren 34. 3. atalak dio:

*En los contratos públicos de obras, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, que celebren las entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, siempre y cuando éstos **no hubieran perdido su finalidad** como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, y cuando esta situación **genere la imposibilidad** de continuar la ejecución del contrato, **el contratista podrá solicitar la suspensión** del mismo desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.*

*La aplicación de lo dispuesto en este apartado **solo procederá cuando el órgano de contratación**, a instancia del contratista y en el plazo de cinco días naturales hubiera apreciado la **imposibilidad de ejecución** del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo. Con esta finalidad el **contratista deberá dirigir su solicitud** al órgano de contratación reflejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible; el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista, esta deberá entenderse desestimatoria.*



No resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere el presente artículo lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 208, ni en el artículo 239 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; ni tampoco lo dispuesto en el artículo 220, ni en el artículo 231 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Hau da eteteak egoera arruntetan suposatzen duten kalte-ordainei buruzko arauak.

*Lo dispuesto en este apartado será de aplicación a aquellos contratos en los que, de acuerdo con el «programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra» estuviese prevista la **finalización de su plazo de ejecución entre el 14 de marzo**, fecha de inicio del estado de alarma, y durante el período que dure el mismo, y como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado no pueda tener lugar la entrega de la obra. En estos casos, el contratista podrá solicitar una **prórroga en el plazo de entrega final** siempre y cuando ofrezca el cumplimiento de sus compromisos pendientes si se le amplía el plazo inicial.*

*Acordada la suspensión o ampliación del plazo, solo **serán indemnizables** los siguientes conceptos:*

1.º Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.

Los gastos salariales a abonar, siguiendo el VI convenio colectivo general del sector de la construcción 2017-2021, publicado el 26 de septiembre de 2017, o convenios equivalentes pactados en otros ámbitos de la negociación colectiva, serán el salario base referido en el artículo 47.2.a del convenio colectivo del sector de la construcción, el complemento por discapacidad del artículo 47.2.b del referido convenio, y las gratificaciones extraordinarias del artículo 47.2.b, y la retribución de vacaciones, o sus conceptos equivalentes respectivos pactados en otros convenios colectivos del sector de la construcción.

Los gastos deberán corresponder al personal indicado que estuviera adscrito a la ejecución antes del 14 de marzo y continúa adscrito cuando se reanude.



Gastu horiekin lotuta, argi utzi behar da azpikontratutako operadore ekonomikoak dauzkan langileriako gastuak ez direla karte-ordainen artean sartzen. Horrela, adierazi du Estatuko Abokatutza Orokorrak 2020ko martxoaren 23an egindako txostenean.

2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión del contrato.

3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido y su importe sea inferior al coste de la resolución de tales contratos de alquiler o mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos.

4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.

El reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y al resarcimiento de daños y perjuicios que se contempla en este artículo únicamente tendrá lugar cuando el contratista adjudicatario principal acredite fehacientemente que se cumplen las siguientes condiciones:

– *Que el contratista principal, los subcontratistas, proveedores y suministradores que hubiera contratado para la ejecución del contrato estuvieran **al corriente** del cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020.*

– *Que el contratista principal estuviera **al corriente** en el cumplimiento de sus obligaciones de pago a sus subcontratistas y suministradores en los términos previstos en los artículos 216 y 217 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, a fecha 14 de marzo de 2020.*

D. Hasi barik dauden zerbitzu eta hornidura konkretuei buruz eta jada helburuak zentzurik ez dutenei buruz



Sektore Publikoko kontratuen Legearen 211. 1. artikulua zehazten ditu kontratua suntsitzeko arrazoiak eta horien artean administrazio eta kontratistaren arteko akordioa egotea jasotzen da (c atalean)

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 212.4 artikulua garatzen du bien arteko akordioak zein baldintza bete behar dituen, eta dio: *La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.*

Kontratua arrazoi horrengatik suntsitzearen eraginei buruz, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 213. artikulua lehenengo atalean dio: *Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas.*

Alde bien akordioaz gain, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 211.1 g atalak hurrengo suntsitze kasua aurreikusi du:

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Kasu horretan eragina 213. 4. atalean jaso da. Atal horrek dio: *Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la letra g) del artículo 211, el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista o este rechace la modificación contractual propuesta por la Administración al amparo del artículo 205.*



Agiri hau benetakoa dala udalaren egoitza elektronikoan egiaztatu ahal dozu.

Kodea:
07E40003F52A0004R0R5M6V5Z8

Sinadurea eta data

JURDANA URIARTE LEJARRAGA-IDAZKARI NAGUSIA - 25/03/2020
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 25/03/2020
13:29:05

EXPEDIENTE ::
2020IDA_DOK0013
Data: 16/01/2020
Lekua: Bermeon
Erregistro unidatea:
Erregistro nagusia



E. Tramitazioan dauden kontratuei buruz

Martxoaren 16ko 463/2020 Errege Dekretuaren 3. Xedapen Gehigarriarekin bat:

-Kontratazio espedienteen prestaketarako agiriak prestatu daitezke.

-Argitaratzeko edo lizitzeko fasera iritsitakoan, kontratazio-organoak erabakiko du kontratuaren deialdia edo lizitazioa argitaratu ala ez. Argitaratzea erabakiz gero, eskaintzak aurkezteko epeak automatikoki etentzat joko dira, eta, beraz, ohartarazi beharko da lizitazioko agirietan eta/edo iragarkietan adierazitako epeak ez direla hasiko alarma-egoeraren deklarazioak eragindako etenaldia amaitzen den arte.

-Eskaintzak, proposamenak edo hautagaitzak aurkezteko fasean dauden espedienteetan, ezarritako epeak eten egingo dira, eta alarma-egoera amaitu eta hurrengo egunean hasiko dira berriro zenbatzen.

-Kontratazio mahaietan dauden espedienteetan barne tramiteak egiten jarraitu daiteke, beti ere, operadore ekonomikoen inplikaziorik eskatzen ez denean. Hau da, barneko lana egiten jarraitu ahal da, baina hirugarrenen parte hartzea behar denean (eskaintzak aurkezteko, zuzenketak egiteko, agiriak aurkezteko, saio publikoak egiteko...) epeak etenda daude, salbu eta:

- Epeak ez eteteko hirugarrenen adostasuna dagoenean
- Interes orokorrean oinarrituta beharrezkoa denean epeak ez etetea
- Zerbitzuen oinarritzko funtzionamendua bermatzeko beharrezkoa denean epeak ez etetea

Hiru kasu horietatik bat ematen bada, espedientearekin jarraitzeko arrazoitutako erabakia hartu behar da.

Kontratazio mahaiak alarma egoera irauten duen bitartean bideokonferentzien bitartez egin daitezke, beti ere, segurtasun neurri guztiak bermatuta eta urriaren 1eko 40/2015 Legearen 17.1. artikulua araber. Publikoak diren kontratazio mahaiak burutzen



badira aurretik aipatutako hiru kasuetatik bat ematen delako, lizitatuzaileek bideokonferentzien bitartez parte hartu ahal izango dute publikoak diren kontratazio mahai horietan.

-Lizitazioaren eta kontratua formalizatzearen aurretiko baldintzak betetzeari buruzko egiaztagirak aurkezteko fasean dauden espedienteetan, bai eta kontratua formalizatzeko fasean daudenetan ere, jarduketa administratibo horietarako epeak etenda daudela ulertuko da. Hala ere, hurrengo kasuetan ez dira etengo epeak:

- Enpresa esleipendunek beren borondatez betetzen badituzte aurreko eskakizunak
- Interes orokorrean oinarrituta beharrezkoa denean epeak ez etetea
- Zerbitzuen oinarritzko funtzionamendua bermatzeko beharrezkoa denean epeak ez etetea

Hiru kasu horietatik bat ematen bada, espedientearekin jarraitzeko arrazoitutako erabakia hartu behar da.

-Izapidetzen dauden segidako prestazioko zerbitzu eta horniduren espedienteen kasuan, formalizatu barik daudenean, 8/2020 Legegintzako Errege Dekretuaren 34.1. artikulura jo behar dugu. Artikulu horrek hitzez hitz dio:

*Además, en aquellos contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, cuando al vencimiento de un contrato **no se hubiera formalizado** el nuevo contrato que garantice **la continuidad de la prestación** como consecuencia de la paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, podrá aplicarse lo previsto en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo expediente.*



Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 29.4 artikulua dio: *cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.*

Beraz, artikulua horren arabera, jatorrizko kontratistak zerbitzua edo hornidura ematen jarraitu beharko du kontratu berria exekutatzen hasi arte eta gehienez 9 hilabetetara arte.

- Bukatzeko, gogorazi behar da etete-neurriak ez diela eragingo alarma egoeraren adierazpena eragin duten gertaerekin zerikusia duten kontratazioei.

F. COVID-19 alarma egoera dela eta tramitatu beharreko kontratuei buruz

Alarma egoera honen ondorioz hartu beharreko erabakiak lehentasun osoa izango dute. Eta, noski, baita COVID-19ri lotutako kontratazio espedienteak ere. Kasu horietan emergentziatzko tramitazioa izapidetuko da, Sektore Publikoko kontratuen Legearen 120. artikuluekin bat. Artikulu horren arabera:

1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional:

a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido



o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.

b) ...

c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario.

d) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observará lo dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la prestación.

En el supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera realizado a justificar, transcurrido el plazo establecido en la letra c) anterior, se rendirá la cuenta justificativa del mismo, con reintegro de los fondos no invertidos.

2. Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán con arreglo a la tramitación ordinaria regulada en esta Ley.

3. Ondorioak

A. Segidan ematen diren zerbitzu eta hornidura kontratuei buruz

Alarma egoera dela eta ezinezkoa bada zerbitzu eta hornidurak ematea kontratuak etengo dira. Kasu horietan kalte-ordaina ordaindu beharko zaio kontratistari justifikatutako eta legegintzako errege dekretuak zehaztutako kasuengatik.



B. Zerbitzu eta horniduren kontratua luzatzeko edo hasierako epea luzatzeko aukerei buruz

Aukera dago kontratua luzatzeko edo hasierako epea luzatzeko eta zerbitzua edo hornidura beste epe baten gauzatzeko. Kasu horietan kontratistak kontratuaren hasierako prezioaren %10era arteko kalte-ordaina eska dezake soldata-gastu gehigarriengatik.

C. Obra kontratuei buruz

Kontratistak horrela eskatuta kontratazio organoak erabaki dezake ezinezkoa dela obra kontratua exekutatzea eta kontratistak kalte-ordaina jasotzeko eskubidea izango du, beti ere, justifikatutako eta Legegintzako Errege Dekretuan zehaztutako kasuetan.

D. Hasi barik dauden zerbitzu eta hornidura konkretuei buruz eta jada helburuak zentzurik ez dutenei buruz

Kontratua suntsitu daiteke, bai alde bien adostasunagatik, bai ezinezkoa delako kontratua burutzea. Lehenengo kasuan, alderdiek adostutakoa ordaindu beharko da; Bigarren kasuan, ostera, jasoko ez den %3ko prestazioaren zenbatekoa ordaindu beharko da.

E. Tramitazioan dauden kontratuei buruz:

Izapidetzen eta formalizatu barik dauden kontratu berrien kasuan, jatorrizko kontratuko kontratistak zerbitzu edo hornidurak ematen jarraitu behar du kontratu berria formalizatu arte (gehienez 9 hilabetez).

Gainerako kasuetan, barneko lanarekin jarraitu ahal da, baina hirugarrenen parte hartzea behar denean epeak etenda egongo dira salbu eta:

- Epeak ez eteteko hirugarrenen adostasuna dagoenean
- Interes orokorrean oinarrituta beharrezkoa denean epeak ez etetea



- Zerbitzuen oinarrizko funtzionamendua bermatzeko beharrezkoa denean epeak ez etetea

Hiru kasu horietatik bat ematen bada, espedientearekin jarraitzeko arrazoitutako erabakia hartu behar da.

F. COVID-19 alarma egoera dela eta tramitatu beharreko kontratuei buruz: Lehentasun osoa izango dute eta emergentziazko tramitazioaren bitartez izapidetuko dira, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 120.artikuluarekin bat.

Egoera berezi eta premiazko baten aurrean gaude eta segurtasun juridiko eza nagusitzen da araudia eta egoera aldakorra delako oso.

Momentu honetan dauden arauen arabera informatzen da, kontuan izanik aldaketak egon daitezkeela, eta gogoraraziz osasuna eta interes publikoa nagusitu behar direla, beti ere.

Hori da nire ustea, zuzenbidean oinarritutako bestelako irizpideen kalterik gabe. Dena den, Alkatetzak egoki deritzona erabakiko du.

Bermeon, orri oinean zehaztutako datan

Jurdana Uriarte Lejarraga

Idazkari nagusia

